

LOS SOCIALISTAS EN EL PODER (1982-1996)

JOSÉ MARÍA MARÍN ARCE

UNED

jmarin@geo.uned.es

(Recepción: 12-03-2008; Revisión: 08-05-2008; Aceptación: 03-07-2008; Publicación: 31-10-2008)

1. CAMBIO, MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN EUROPA.—2. LA FASE DURA DE LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL.—3. LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1988.—
4. EL GIRO SOCIAL.—5. EL DECLIVE SOCIALISTA.—6. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN

La larga época de gobiernos socialistas, de 1982 a 1996, supuso la definitiva consolidación de la democracia, la integración en las instituciones europeas y la modernización de las estructuras sociales y económicas de nuestro país. Las dos primeras legislaturas socialistas van a estar marcadas por una política que muy bien podría calificarse de liberal-progresista y que correspondían a un PSOE marcadamente centrista. Habrá que esperar hasta 1989 a que se produzca un cierto giro socialdemócrata como fruto de las movilizaciones obreras que culminaron en la huelga general de 1988. A partir de 1992 comienza un largo proceso de declive socialista, que poco a poco va perdiendo una parte importante de su electorado, hasta que en 1996 pierde las elecciones generales en beneficio del Partido Popular.

Palabras clave: España, Partido Socialista Obrero Español, gobierno, Felipe González.

THE SOCIALISTS IN POWER (1982-1996)

ABSTRACT

The socialists' long term in government from 1982 to 1996 marked the definitive consolidation of democracy in Spain. This was when the country joined European in-

stitutions and modernised its social and economic structures. The first two socialist legislatures were characterised by a policy that could be termed progressive liberal, in which the PSOE focussed on the centre of the political spectrum. It was not until 1989 that there was a shift towards more social-democratic policies, following unrest amongst workers that led to the general strike in 1988. After 1992, the party went into a drawn-out decline, gradually losing voters until in 1996 it lost the general elections to the Partido Popular.

Key words: Spain, socialist party, PSOE, government, Felipe González.

1. CAMBIO, MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN EUROPA

Las elecciones generales de octubre de 1982 supusieron una cierta readaptación del mapa electoral y del sistema de partidos que había predominado durante la transición. Las anteriores elecciones de 1979 habían configurado un sistema en el que junto a dos partidos claramente mayoritarios, la UCD y el PSOE, ubicados en el centro del espectro político, existían otros dos, AP y PCE, situados en la derecha y en la izquierda, respectivamente, que tendían a un pluralismo moderado (1). Sin embargo, no se cumplió este pronóstico en las elecciones de 1982, cuyos resultados lo que provocaron fue un realineamiento en el sistema de partidos que afectó fundamentalmente a las fuerzas políticas de ámbito nacional (2). Al mismo tiempo se produjo la consolidación de un bipartidismo imperfecto en el que uno de los partidos, el PSOE, duplicaba en votos y en escaños a la derecha y se convertía en hegemónico no sólo en el Parlamento sino en la vida política española.

El PSOE en 1982 era ya un partido de centro izquierda que se había alejado claramente de cualquier inclinación de dogmatismo y de pretendido exclusivismo marxista (3) y que ocupaba una parte importante del espacio electoral de la UCD cuando tuvieron lugar las elecciones generales de 1982 (4). Un partido moderado que se presentaba a la confrontación electoral con el slogan *Por el cambio*, que consistía –según palabras de Felipe González– en que España funcione. Algo que desde luego era importante pero que no significaba ningún tipo de transformación de las estructuras económicas o sociales. Ya se habían encargado los socialistas durante la campaña electoral de tranquilizar a lo que entonces se llamaban los «poderes fácticos», con los que, por otra parte, nunca tuvieron la voluntad de enfrentarse (5). El PSOE «llevó adelante con

(1) SARTORI (1980): 226.

(2) LINZ y MONTERO (1986): 646-647.

(3) TEZANOS (1992): 26.

(4) Comentarios de EDWARD MALEFAKIS, en BURNS MARAÑÓN (1996): 275.

(5) VELASCO (1996): 28. «Los empresarios no temen un triunfo del PSOE», en *El Socialista*, 10-16 de mayo de 1982.

extremada cautela aquellas acciones reformistas que rozaban a la Banca, la Iglesia o el Ejército. Ninguna de las grandes decisiones se tomó sin la aquiescencia de esas fuerzas, sobre todo en aquello que les afectaba directamente» (6). La enseñanza privada continuaría recibiendo subvenciones, la Iglesia seguiría estando financiada por el Estado, y el gobierno apoyaría a los poderes financieros y protegería la economía de mercado (7). Además, los socialistas se habían manifestado en numerosas ocasiones contra las nacionalizaciones que habían practicado los gobiernos anteriores, a las que consideraban una forma encubierta de «socialización de pérdidas» (8). Así es que las nacionalizaciones previstas en el programa electoral se limitaban a la red eléctrica de alta tensión (9).

Buen cuidado tuvo el gobierno en tranquilizar a los sectores económicos cuando a los pocos meses de su mandato tuvo que recurrir a la expropiación de Rumasa. Aquella fue una de las actuaciones más espectaculares del Ministro de Economía, Miguel Boyer, que tuvo que tomar aquella medida por la necesidad de impedir una serie de quiebras en cadena (10), pero enseguida dejó claro que su afán no era nacionalizador, reprivatizando las diferentes empresas del *holding* después de reflotarlas con fondo públicos (11). El asunto Rumasa no fue, por lo tanto, un acto de fuerza ni de amenaza contra la derecha, ni contra los empresarios, pues –según reconoció Boyer– «la decisión de reprivatizarla tenía un mensaje muy claro: tranquilizar a los mercados y dar una inequívoca señal de que el gobierno socialista no estaba por las nacionalizaciones y que contaba con la empresa privada» (12).

La Asociación Española de Banca Privada (AEB), en cuanto tuvo garantías de que los bancos de Rumasa serían devueltos al sector privado, emitió un comunicado en el que aceptaba la expropiación, con el objeto de poner orden en las sociedades del *holding*. Aún fue más benévolo y comprensivo Rafael Termes, consejero del Banco Popular y presidente de la AEB, que afirmaba que «resultaba evidente que el gobierno –fuera el que fuera– no iba a permitir que se aplicaran las reglas del libre mercado a un grupo de bancos y empresas cuya

(6) ARÓSTEGUI (1999): 317.

(7) JULIÁ (1996a): 585.

(8) FERNÁNDEZ-MARUGÁN (1992): 146. JOAQUÍN ALMUNIA: «Empresa pública, sí; nacionalizaciones, no», en *El Socialista*, n.º 253, 14-20 abril de 1982. CARLOS SOLCHAGA: «Sobre las nacionalizaciones y el PSOE», en *El Socialista*, n.º 256, 5-12 de mayo de 1982. MIGUEL BOYER: «Las nacionalizaciones: de mito social a instrumento a considerar», en *El Socialista*, n.º 254, 21-28 de abril de 1982.

(9) *El Socialista*, 22-28 de septiembre de 1982.

(10) «Rumasa –según explica Tortella– fue incautada por causas de urgencia social. La legalidad de la medida es discutible, pero su popularidad fue grande y seguramente su oportunidad también, porque, en efecto, Rumasa era como una bomba de relojería». TORTELLA (1996): 571.

(11) GILLESPIE (1991): 433. «Los intereses creados», en *El Socialista*, 2-8 de marzo de 1983.

(12) BURNS (1996): 306.

caída, si se producía, iba a arrastrar a un gran número de accionistas, depositantes, acreedores y trabajadores» (13). No es extraño que algunos pensarán que la Banca había actuado como cómplice del gobierno. Entre otros, Ruiz Mateos que acusó a miembros del *Opus Dei* y especialmente a Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, de haber organizado la trama contra Rumasa con la connivencia de las autoridades del Banco de España.

Este carácter centrista del PSOE, junto a la aplicación de una política que muy bien podría calificarse de liberal-progresista, van a marcar las dos primeras legislaturas del gobierno socialista. Habrá que esperar hasta 1989 a que se produzca un cierto giro socialdemócrata como fruto de las movilizaciones obreras que culminaron en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. No es extraño, por lo tanto, que entre 1983 y 1988, la mayor oposición viniera de los sectores de izquierda, sobre todo de los sindicatos, y no de las fuerzas de la derecha.

La derecha, muy alejada del centro, todavía sin organizarse y sin «resolver su propio crucigrama –como decían los socialistas–» (14), tuvo grandes dificultades para definir una política alternativa (15), optando la mayoría de las veces por desarrollar un tipo de oposición catastrofista que no respondía a la realidad del país ni a la percepción de una gran parte del electorado. Frente a la mayoría absoluta del PSOE, la estrategia parlamentaria de coalición popular (AP-PDP-PL) recurrió al obstruccionismo, utilizando con demasiada frecuencia el recurso previo de inconstitucionalidad, que sólo sirvió para retrasar el desarrollo de la Constitución, paralizando leyes tan importantes como la ley de libertad sindical, la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley de despenalización parcial del aborto y la ley orgánica del derecho a la educación (LODE). Fueron precisamente estas dos últimas leyes las que provocaron una importante confrontación de los sectores sociales más conservadores contra el gobierno.

Quizás fue en el terreno de la *Educación* donde se produjeron mayores divergencias entre la derecha y el gobierno, que procuró desarrollar con mayor fidelidad su programa electoral, produciéndose, en no mucho tiempo, cambios verdaderamente importantes tanto en la extensión y democratización de la enseñanza, como en la mejora y creación de centros públicos (16). En el resto de las políticas sectoriales apenas hubo confrontación, porque fueron en gran medida continuación de las iniciadas por los anteriores gobiernos de UCD, en contra de lo que se pudiera pensar en principio (17). En las grandes decisiones referidas al *desarrollo autonómico*, el partido socialista mantuvo el consenso entre los dos grandes partidos de ámbito estatal, tal y como había sucedido durante los años de la transición.

(13) TERMES (1994): 193.

(14) *El Socialista*, 18-24 de agosto de 1982, p. 18.

(15) MONTERO (1987): 9.

(16) «La democracia entra en la escuela», en *El Socialista*, 6-12 de julio de 1983.

(17) TUSELL (2003): 287.

La *política antiterrorista* respecto a ETA fue muy similar desde los comienzos de la transición hasta los años noventa. Tanto los gobiernos de la UCD como los del PSOE aplicaron, si bien con distinto énfasis, dependiendo de las circunstancias, las mismas líneas maestras en su lucha contra el terrorismo etarra. Al gobierno en el año 1982 le preocupaba, lógicamente, el terrorismo y su propia inexperiencia en la lucha antiterrorista; por lo tanto, ni se planteó cambiar las cúpulas de mando en las fuerzas de seguridad, aunque sospechara que utilizaban métodos ilegales en la lucha antiterrorista y prefirió hacer la vista gorda (18). Desde las propias filas socialistas se exigían responsabilidades al ministro del Interior, José Barrionuevo, para «que garantizara la efectiva desaparición de la tortura en nuestro país» (19).

Sin embargo, en el Ejército la situación fue diferente, pues «lo que allí sí pudimos hacer –reconoce Joaquín Almunia– fue ir cambiando poco a poco la cúpula militar, mientras que en Interior no fue posible. Primero porque la lucha contra el terrorismo no admitía tregua y segundo porque al Ministerio del Interior no se le puede mandar con la misma capacidad jerárquica que al Ministerio de Defensa» (20). En efecto, fue precisamente en el Ejército, la institución en la que permanecían los sectores más nostálgicos de la dictadura, donde el primer gobierno socialista actuó de una manera más decidida, tratando de desactivar los intentos golpistas que todavía suponían una amenaza al sistema democrático (21).

A pesar de la magnífica labor de Narcís Serra al frente de la cartera de Defensa y al conjunto de reformas que puso en marcha para conseguir el control efectivo del ejército por parte del gobierno, «acabando con el fantasma involucionista del poder militar autónomo» (22), los servicios de inteligencia desmontaron, en junio de 1985, un nuevo intento golpista en forma de atentado contra los representantes de las más altas instituciones del Estado. El plan abortado pretendía hacer estallar una bomba debajo del estrado en el que se iban a encontrar los Reyes, el Príncipe de Asturias y el presidente del Gobierno el día 2 de junio en La Coruña, con motivo del desfile militar del día de las Fuerzas Armadas. El desmantelamiento del complot fue una operación que se mantuvo en el más absoluto secreto, porque «en ese momento –según explicó Felipe González– yo no quería, ni podía intranquilizar al país, y además no quería crear un obstáculo nuevo que retrasara nuestra incorporación a Europa, que era inmi-

(18) JUAN ALBERTO BELLOCH reconoce que los primeros gobiernos socialistas tuvieron miedo a cambiar los mandos policiales entre otras cosas por el recuerdo de la Segunda República, que se «perdió por el orden público». BURNS (1996): 429. Ver «Caso Arregui», en *El Socialista*, 14-20 de diciembre de 1983.

(19) LUDOLFO PARAMIO: «Dos responsabilidades del ministro del Interior» en *El Socialista*, 1 de enero de 1986.

(20) BURNS (1996): 324.

(21) «La reforma militar», en *El Socialista*, 9-15 de noviembre de 1983.

(22) NAVAJAS (2007): 225.

nente (...) ¿Crees que hubiéramos firmado el ingreso de España en CE –se preguntaba González– si se hubieran enterado de que había un golpe en movimiento?» (23).

Tampoco en el desarrollo de la *política exterior* hubo importantes discrepancias entre el PSOE y la derecha. Ni en la marcada orientación occidentalista que se impuso en el PSOE tras las elecciones de 1982, ni en las difíciles y largas negociaciones para la integración en la Comunidad Europea, que supuso un éxito político de gran alcance, culminando un largo proceso comenzado durante los años de la transición. ¡Ya éramos europeos!, y este sentimiento era compartido por la gran mayoría de la sociedad española. Como decía Fernando Morán:

«La opinión pública reaccionó con entusiasmo y generosidad ante el fin de las negociaciones con la Comunidad. Sin distinciones de clases, de regiones, de color político. Se sentía el país integrado en una acción verdaderamente nacional. Se entendía el resultado como la culminación satisfactoria de un esfuerzo común. Se abría para España un nuevo horizonte. También el Gobierno, y especialmente su Presidente, estuvieron a la altura del acontecimiento. En ningún momento se trató de explotar el éxito con intenciones partidistas» (24).

Sólo con respecto a la OTAN se produjeron divergencias, no sobre el fondo de la cuestión, puesto que los grupos de Coalición Popular eran profundamente pro-atlantistas, sino sobre los términos en que se planteó el referéndum, aunque, en realidad, la derecha lo único que pretendió fue utilizar la consulta popular para desgastar al gobierno y sacar tajada electoral de un posible fracaso del PSOE. Por el contrario, el cambio de postura de los socialistas respecto a la Alianza Atlántica se convirtió en uno de los ejes más importantes de la oposición de izquierdas. Una oposición, con escasa representación parlamentaria, que tuvo que recurrir a la movilización popular en un intento de articular políticamente el sentimiento anti-atlantista de una parte importante de la población.

Hay que tener en cuenta que la defensa de la OTAN no conectaba con la opinión mayoritaria de los españoles. La amenaza soviética resultaba muy ajena en la mentalidad de un país que no había vivido ninguna de las dos guerras mundiales y cuya preocupación por la seguridad se centraba más en el Mediterráneo y el norte de África. A esto había que añadir la vocación pacifista de las nuevas generaciones y el rechazo general a la carrera de armamentos. No sólo en España, sino también en Europa, a principios de los años ochenta, se desarrolló un amplio movimiento pacifista, comprometido con el desarme y la desaparición de los bloques, en el que se encuadraban organizaciones como *L'Union belge pour la Defense de la Paix*, la británica *European Nuclear Disarmament*, *The Peace Committee of Finland*, o el *Arbeitskreis Atomwaffenfreies Europa* de Berlín, instituciones como la *Fundación Bertrand Russell* y *Pax Chris-*

(23) PREGO (2000): 218.

(24) MORÁN (1990): 455.

ti (25), así como numerosos representantes de partidos socialistas, verdes y radicales de toda Europa (26). Muchas de estas organizaciones difícilmente podían ser tachadas de pro-soviéticas, pues detrás del resurgimiento del pacifismo no siempre se encontraba Moscú.

Hay que reconocer que el PSOE, cuando accedió al poder en 1982, se encontraba en una difícil situación respecto a la OTAN. En primer lugar, la posición oficial del partido (29 Congreso del PSOE de 1981) era propiciar la salida de la Alianza (27). En segundo lugar, el PSOE había encabezado las movilizaciones de 1981 contra la decisión del gobierno de UCD de «meternos en la OTAN por la puerta de atrás». Y en tercer lugar, había hecho del slogan *OTAN, de entrada NO* uno de los reclamos más importantes de la campaña electoral de 1982, prometiendo la celebración de un referéndum para decidir la salida de la Alianza. Estuvo claro que el PSOE utilizó el tema de la OTAN como gancho electoral, a pesar de que algunos socialistas, como Morán, pretendieron que no se incluyera el compromiso del referéndum en el programa electoral del partido (28).

Pero, cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982, el nuevo gobierno socialista enseguida se dio cuenta de que no era conveniente, ni incluso posible, la retirada de la Alianza, pues como decía Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, «los partidos que acceden al poder deben asumir las obligaciones internacionales contraídas por los gobiernos precedentes para evitar la inestabilidad» (29), y en este sentido, anunció que «España detenía el proceso en la organización militar, se mantenía en la Alianza en la que sería un aliado seguro, fiel y cooperador (...) y en su momento celebraría una consulta al electorado para conocer su decisión respecto a la Alianza» (30).

Sin embargo, Felipe González, en vez de abordar directamente el problema, respetando la decisión tomada por Calvo Sotelo, se decidió por impulsar una política dilatoria, que algunos autores han calificado de *ambigüedad calculada* —expresión que Felipe González considera suya— (31), que le permitiera cambiar primero la posición del gobierno, después la del partido para, finalmente, buscar el momento más propicio de convocar el prometido referéndum.

Durante los primeros meses de legislatura, algunos miembros del gobierno fueron progresivamente modificando su posición inicial, a través de continuas declaraciones en la prensa cada vez más favorables a la permanencia en la Alianza. Sin embargo, estas manifestaciones no se correspondían con la actitud del vicepresidente del Gobierno, ni con la de otros ministros como Javier Sola-

(25) *El Socialista*, 18-24 de noviembre de 1981.

(26) *El País*, 24-10-1983, editorial «Manifestaciones por la paz».

(27) «Razones para una negativa», en *El Socialista*, 2-8 de septiembre de 1981.

(28) MORÁN (1990):23.

(29) *El Socialista*, 15-21 de diciembre de 1982.

(30) MORÁN (1990): 28. *El Socialista*, 6-12 de octubre de 1982.

(31) PREGO (2000): 246.

na, José María Maravall, Ernest Lluch o Julián Campo, claramente favorables al abandono de la OTAN (32). Otros ministros, como Miguel Boyer, guardaron siempre un prudente silencio respecto a tan espinoso asunto, evitando hacer comentarios sobre la Alianza (33).

A mediados de julio de 1983, Alfonso Guerra declaraba rotundamente que España debía salir de la Alianza e invitaba además a terminar con la ambigüedad que desde círculos gubernamentales se estaba favoreciendo (34). En el mismo sentido se pronunciaba el editorial de *El Socialista* de julio de 1983 en el que se afirmaba que nada había cambiado desde el último congreso del partido para cambiar de postura (35). Esto lo suscribía plenamente Guerra cuando afirmaba que «no tenía que modificar nada, entre otras cosas porque la mayor información que tengo me ha hecho corroborar que este país quiere mayoritariamente no estar en la OTAN. Es un deseo incluso de los electores de Alianza Popular» (36). Por lo tanto, su posición seguía siendo la misma que en 1981, a pesar de que el PSOE ahora tuviera responsabilidades de gobierno, y además no comulgaba con quienes habían cambiado de criterio y se mostraban convencidos de que España no podía retroceder y salir del «club militarista».

La «conversión» de Guerra no comenzó de una manera pública hasta mediados de 1984 cuando declaraba a la prensa que aunque no había que haber entrado en la OTAN «ahora las cosas se han oscurecido un poco, porque ya estamos en la Alianza (...) de todas maneras no sería honesto afirmar que la OTAN coarta la soberanía española y que incrementa el peligro nuclear» (37). Ya en junio de 1984, Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, había enviado un texto a Felipe González en el que se valoraban las distintas posiciones sobre la OTAN, se aconsejaba convocar un referéndum y se recomendaba permanecer en la Alianza «pero manteniendo con claridad la no inserción en la organización militar» (38).

A pesar de todas estas declaraciones, no hubo una clara definición sobre la OTAN hasta octubre de 1984, cuando Felipe González presentó en el Congreso su decálogo sobre política exterior en el que se proponía la permanencia en la Alianza, sin integración en el mando militar, con la decisión de la no nuclearización de España y renegociando el establecimiento de las bases norteamericanas (39).

Tras el fin de la ambigüedad del gobierno respecto a la OTAN, el siguiente paso era conseguir el apoyo del partido, que de acuerdo con las resoluciones del

(32) *El País*, 20-7-1983.

(33) Respecto a la OTAN, Boyer declaraba que «esa materia no me incumbe y, además, sobre ella se pronunciará el Gobierno en su momento». *El País*, 14-7-64.

(34) *El País*, 17-7-1983.

(35) *El Socialista*, 6-12 de julio de 1983.

(36) FERNÁNDEZ-BRASO (1983): 183.

(37) *El País*, 27-7-1984.

(38) MORÁN (1990): 272.

(39) YÁÑEZ-BARNUEVO y VIÑAS (1992): 99.

último congreso seguía defendiendo las tesis contrarias a la permanencia en la Alianza (40). Morán recuerda que «el ambiente en el partido era claramente hostil a la permanencia en la organización y aún en continuar siendo parte del Tratado de Washington. Pero, el control de la dirección era, como siempre, muy eficaz, casi férreo» (41).

Sin embargo, no fue fácil convencer a la militancia socialista, que con tanto ardor se había movilizado en 1981 contra la OTAN, de la necesidad de apoyar la permanencia en la Alianza. La dirección del PSOE, y muy especialmente Felipe González, tuvieron que emplearse a fondo en los debates del 30 Congreso del PSOE, celebrado en diciembre de 1984, para conseguir aislar a los partidarios de la salida de la OTAN (42).

Una vez conseguido el apoyo del partido, había que convencer al electorado de la necesidad de mantenerse en la Alianza. Felipe González, además de referirse a la responsabilidad española en la defensa y seguridad europeas y rechazar el neutralismo, argumentos que ya había utilizado el centro-derecha, centró su discurso en señalar las consecuencias que tendría para España una eventual salida de la Alianza: sería un factor de inestabilidad interna e internacional, en la medida en que se pondría en entredicho nuestra credibilidad al romper los compromisos establecidos por gobiernos anteriores; provocaría una alteración de los equilibrios establecidos, contribuyendo a debilitar políticamente a la Alianza, y el último lugar, se vería comprometida la participación española en el proceso de construcción europea. Esta argumentación era fruto –según Morán– de «un pesimismo muy asentado durante tantos años de desigualdad y marginación –si no entramos en la OTAN, se entiende que nos harán entrar a patadas–. Es decir, el complejo de enano compatible y paralelo a la retórica nacional» (43).

Este intento de vincular la presencia en la Alianza con el proceso de integración en la CE fue permanentemente utilizado por los dirigentes socialistas durante los años que duró el debate sobre la OTAN. Se trataba de convencer a los españoles de que no era posible participar en la Europa económica sin contribuir en la defensa común, y éste fue el argumento principal que emplearon la mayoría de los dirigentes socialistas para justificar el cambio de posición del gobierno. El ministro de Defensa, Narcís Serra, era quien con mayor contundencia establecía esta relación, añadiendo además las repercusiones que una eventual retirada de la OTAN tendría para el desarrollo de nuestra industria e incluso para la consolidación de la democracia (44). Estas argumentaciones

(40) *El Socialista*, 15-16 de diciembre de 1984.

(41) MORÁN (1990): 384.

(42) Por 412 votos a favor, 126 en contra y 42 abstenciones fue aprobado el texto de la ponencia sobre política exterior, presentado por Felipe González en el XXX Congreso extraordinario del PSOE. *El Socialista*, 16 de diciembre de 1984.

(43) MORÁN (2002): 205.

(44) DEL VAL (1996): 183. *El País*, 20-1-85.

trataban de intimidar a los ciudadanos, porque «si nos quedamos en la OTAN –como señalaba Fernando Savater– no será por lo que esperemos conseguir allí, sino por lo que tememos que nos hagan si nos salimos... Y en ese caso la amenaza no es precisamente soviética» (45).

Esta política de mezclar insistentemente la CE con la OTAN fue rechazada por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, que afirmó rotundamente que:

«Ni antes de que nosotros nos hiciésemos cargo de la negociación para adherirnos a la CEE ni durante nuestra labor negociadora se nos planteó nunca condición –ni explícita ni implícita– que ligase la pertenencia en la Comunidad con la permanencia en la OTAN o la integración en su organización militar. La integración en la CEE tenía en sí misma un valor suficiente para nosotros y para los miembros de entonces. Era económicamente y políticamente positiva» (46).

La principal preocupación de Fernando Morán, desde que ocupó la cartera de Exteriores, en octubre de 1982, fue la puesta en práctica de una política exterior de carácter autónomo e independiente que fuera compatible con la presencia en la Alianza Atlántica, tratando de desvincularla con la CE y con los acuerdos de defensa establecidos con EE.UU. Fue precisamente esta última cuestión la que provocó los primeros roces de Morán con el ministro de Defensa y con Felipe González, que tomó claro partido por Narcís Serra. Estas divergencias fueron el resultado final de una continua competencia entre el presidente del Gobierno y su ministro de Exteriores, no tanto porque existiera una «diplomacia paralela» emanada desde La Moncloa, sino más bien por el carácter excesivamente presidencialista de Felipe González que impedía el funcionamiento de un verdadero «gobierno de gabinete».

Una vez firmado el tratado de adhesión a la CE, en junio de 1985, Felipe González decidió la convocatoria de referéndum sobre la OTAN y aprovechó además la inesperada dimisión de Miguel Boyer para constituir un nuevo gabinete en el que Fernández Ordóñez sustituía a Morán en la cartera de Exteriores. A juicio de este último, aquello fue «un cambio innecesario como innecesaria era una corrección en el rumbo de la política exterior» (47). El nuevo ministro se embarcó decididamente en la campaña del Gobierno a favor de la permanencia en la OTAN, con un estilo y unas argumentaciones que nunca hubiera utilizado Morán. «Si se produce la salida de la Alianza y gana el *no* en el referéndum –declaraba Fernández Ordóñez– moralmente el Mercado Común se habrá acabado para nosotros (...), pretender que podamos continuar en la CE es ridículo; España tendrá que retirarse de la CE, o permanecer como socio de segunda fila» (48).

(45) *El País*, 28-6-1984, p. 12.

(46) MORÁN (2002): 206.

(47) MORÁN (1990): 480.

(48) *El País*, 10-3-1986.

El resultado del referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986 supuso un gran triunfo tanto para Felipe González como para el PSOE, que consiguió ganar nuevamente las elecciones legislativas de 1986. Sin embargo, a largo plazo el desarrollo del referéndum fue un factor de erosión del partido socialista. Destacados dirigentes socialistas, como Narcís Serra o Joaquín Almunia, años más tarde reconocieron que fue un clarísimo error tanto la férrea oposición que en 1981 mantuvieron a la entrada en la OTAN como la posterior convocatoria del referéndum (49).

Además de las movilizaciones contra la OTAN, hubo una fuerte oposición sindical contra la política de reformas liberalizadoras en el terreno de la economía que habían ya comenzado durante los gobiernos de la UCD y que el PSOE tuvo inevitablemente que culminar. El imprescindible saneamiento de la economía, el comienzo en serio de la reconversión industrial, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, el adelgazamiento y reforma del sector público y la contención de los salarios, comprendían medidas de ajuste tan duro que sólo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE que en aquellos momentos gozaba de una gran autoridad moral sobre las capas sociales más desfavorecidas (50). Sin embargo, la escasa predisposición del gobierno al diálogo con los sindicatos y las actitudes excesivamente desafiantes de los ministros de Economía e Industria condujeron al enfrentamiento con las centrales sindicales y provocaron un rosario de luchas obreras, primero contra la reconversión industrial y más tarde contra la política económica, que condujeron a la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

2. LA FASE DURA DE LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

Cuando los socialistas llegaron al poder en octubre de 1982, se encontraron con unos planes de reconversión sectorial, aprobados en 1981, que prácticamente no habían entrado en vigor y que además no eran suficientemente avanzados para resolver definitivamente los graves problemas de la industria española.

Las líneas maestras de la reconversión propuestas por el ministro de Industria, Carlos Solchaga, aparecieron en mayo de 1983 en el Libro Blanco de la Reindustrialización. En su prólogo se explicaba claramente la necesidad imperiosa de acometer el proceso de reconversión industrial, evitando una política de ajuste salvaje basada en la supervivencia de los más fuertes, y apostando por una política de intervención que ordenara el proceso de salvamento de aquellas partes del tejido industrial que sometidas a los ajustes necesarios podrían sobrevivir en el ámbito de una próxima incorporación a la CE (51).

(49) BURNS (1996): 191 y 314.

(50) VALDELVIRA (1998): 48.

(51) *Libro Blanco de la reindustrialización* (1983), Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 1983. p. 8.

Para todo esto era necesario recurrir a los fondos públicos, pues ni los gobiernos de UCD ni los del PSOE lograron implicar al capital privado en el saneamiento financiero de las empresas y sectores en reconversión. Uno de los mayores obstáculos que debió salvar la política de reconversión fue la escasez de recursos financieros. «A la dificultad de hacer acopio de recursos públicos, consecuencia de la obligada reducción del déficit presupuestario, había que añadir que el sistema financiero no suministró en condiciones adecuadas el necesario volumen de fondos» (52).

Los mayores problemas que tuvo el gobierno socialista no se derivaron de su planteamiento general sobre la reconversión, sino de cómo se abordaba la reducción de plantillas y de sus reticencias a la hora de negociar con los sindicatos los planes de reconversión (53). El PSOE en la oposición había criticado la falta de una política industrial coherente por parte de los sucesivos gobiernos de la UCD, proponiendo, en numerosas ocasiones, la elaboración de una serie de planes de reconversión y reindustrialización con el acuerdo de los sindicatos (54). Sin embargo, el primer gobierno del PSOE no llevó a cabo ningún intento serio de concertación en la planificación de la política industrial y de los procesos de reconversión ni con las centrales sindicales ni con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias. Como recuerda el entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga, «los sindicatos se opusieron cuanto pudieron a la reconversión industrial, que deseaban que fuera mucho menos traumática, lo cual era perfectamente previsible y tanto el Real Decreto Ley que la inició como la propia Ley de Reconversión Industrial no hallaron más amparo en el Parlamento que el voto disciplinado más que convencido de los socialistas» (55).

Habría que matizar estas declaraciones señalando que si bien es cierto que CC.OO. se enfrentó desde el principio a los procesos reconversores del gobierno, la UGT, en cambio, apoyó inicialmente las distintas leyes de reconversión y las medidas laborales propuestas por el Ministerio de Industria. Sin embargo, el apoyo que la UGT ofreció al gobierno socialista nunca fue incondicional (56) y el sindicato socialista mantuvo una postura bastante reticente con algunos aspectos de la reconversión propuestos por el gobier-

(52) ALBENTOSA (1985): 181.

(53) En el programa del Partido Socialista presentado a las elecciones generales de 1982 se decía que «la planificación concertada, a través de la negociación con las principales fuerzas socioeconómicas, descentralizadas y flexibles, se contempla como un instrumento básico de la política económica de los socialistas». *El Socialista*, 22-28 septiembre de 1982, p. 15.

(54) Desde las páginas de *El Socialista*, reconocidos economistas del PSOE, la mayoría integrados en el grupo Alihiers, hicieron continuos llamamientos a la concertación durante los años 1979 a 1982.

(55) SOLCHAGA (1997): 63. *El País*, 28-12-83.

(56) «La UGT –decía Redondo– está vigilante ante posibles actitudes conservadoras que pudiera adoptar el Gobierno socialista, pero apoyará a este Gobierno porque un fracaso del Gobierno socialista sería el fracaso del movimiento sindical español y de todo el movimiento obrero». *El Socialista*, 17 de junio de 1983, p. 29.

no (57). Tampoco UGT sintonizaba con las medidas de política económica que el ministro Miguel Boyer intentaba poner en vigor, y además acusaba al gobierno de estar actuando en algunos casos con arrogancia y preferir la confrontación social más que el acuerdo (58). Así es que, cuando los dirigentes de la UGT se dieron cuenta de que el gobierno sólo pretendía utilizar al sindicato para que firmara los planes de reconversión y no para negociar la política industrial y mucho menos la política económica, fueron poco a poco marcando distancias con el gobierno.

Las importantes movilizaciones obreras, que comenzaron a principios de 1983 con el largo conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo y continuaron con las huelgas del sector naval hasta comienzos de 1987 (59), sirvieron para modificar sustancialmente los planes de reconversión en temas como la regulación de plantillas. El propio Solchaga reconocía que no pudo aplicar los planes tal y como él los diseñó y al final no pudo doblegar a los sindicatos:

«Se trataba –decía Solchaga– de elegir entre lo malo y lo peor y creo que elegimos lo primero. Es cierto que su instrumentación no se hizo exactamente sobre las pautas de extinción de contratos de trabajo de los excedentes laborales que yo había defendido y que no sólo hubieran ahorrado dinero a los contribuyentes sino que, además, hubieran supuesto un aviso para los sindicatos sobre el coste de mantener posturas rígidas en materia de ajuste industrial en momentos de grave crisis» (60).

A pesar de las dificultades y las críticas que suscitaron, los planes de reconversión socialistas sirvieron para reordenar importantes sectores de la industria española y para sanear una parte importante de las empresas en crisis. Como señala Julio Segura, «hay que reconocer a los gobiernos socialistas el coraje político con que asumió el proceso de reconversión. Los riesgos de que sucumbieran a la tentación de dilatar el ajuste industrial fueron fuertes, porque parte sustancial de sus costes tendrían necesariamente que recaer en zonas de fuerte implantación electoral del PSOE y sobre capas sociales que mayoritariamente le votaron. Pero la reconversión se comenzó: con sus luces y sus sombras» (61).

Una de las acusaciones más importantes que en aquellos años se hacía al proceso de reconversión era la gran cantidad de recursos públicos que se utilizaron y que en gran medida fueron destinados a los trabajadores. También se afirmaba reiteradamente que los sindicatos se empeñaban en defender a un sector laboral claramente privilegiado olvidando a los miles de trabajadores en

(57) *Archivo UGT-metal*. «La reconversión industrial en España», Gabinete Técnico, julio de 1991.

(58) Declaraciones de NICOLÁS REDONDO, *El País*, 1 septiembre 1983.

(59) MARÍN (2006): 61-101.

(60) SOLCHAGA (1997): 56.

(61) SEGURA, JULIO: «Años de reconversión y asignaturas pendientes», en *Economistas*, nº 11, 1985, p. 77.

paro. Este tipo de argumentos muy reiterativos en la prensa y apoyados por círculos empresariales, yo creo que no se corresponden con la realidad. Es cierto que las cifras totales destinadas a las empresas sometidas a reconversión fueron muy importantes, pues considerando las distintas fases de la reconversión de 1979 a 1989 los cálculos se aproximan a los 3 billones de pesetas (62). Sin embargo, una gran parte de esos fondos públicos se destinaron al saneamiento financiero de las empresas en crisis, ya fueran públicas o privadas, y a pagar los créditos que la Banca Privada había concedido a muchas de las empresas que formaban parte de sus grupos industriales. Esto supuso que en la práctica una parte muy sustancial de las cantidades dedicadas a la reconversión industrial, en realidad fueran utilizadas para acometer la reconversión bancaria, que ya por sí misma costó alrededor de 2 billones de pesetas y que con cierta razón se ha denominado la reconversión silenciosa.

El sector bancario fue el claro beneficiario de la política de reconversión. En primer lugar, porque en un número significativo de empresas acogidas a la reconversión poseía participación accionarial. En segundo lugar, porque la mayor parte de las empresas en crisis sometidas a reconversión presentaban en su pasivo un importante volumen de créditos y préstamos bancarios, para cuyo saneamiento se destinó una parte importante de las ayudas públicas recibidas. Y en tercer lugar, porque la banca resistió con éxito los intentos de los sucesivos gobiernos para implicarla en la financiación del proceso, y en los casos en que se comprometió en la concesión de nuevos créditos a las empresas en reconversión lo hicieron generalmente contando con suficientes garantías y avales públicos para su devolución (63).

Desde el punto de vista político, el PSOE pagó un precio relativamente importante con la reconversión industrial. En los primeros años de gobierno socialista, desde 1982 a 1985, cuando comenzó con toda su intensidad la campaña contra la OTAN, las movilizaciones contra la reconversión industrial se convirtieron en casi la única oposición al gobierno. Hay que tener en cuenta que la mayoría parlamentaria del PSOE junto a la incapacidad de la derecha para articular una alternativa política a los socialistas, hizo que la oposición se trasladara del Parlamento a la calle. Además, la actitud del gobierno, y especialmente la del ministro de Industria, con respecto a los sindicatos fue un factor importante en la progresiva hostilidad de las centrales sindicales hacia el gobierno y en el deterioro de las tradicionales relaciones entre la UGT y el PSOE.

(62) UGT da la cifra de 2,7 billones de pesetas. *Archivo UGT-metal*: «La reconversión industrial en España», Madrid, julio de 1991. Miquel Navarro da la cifra de 2.955.540 millones de pesetas, repartidos de la siguiente forma: 145.642 millones correspondientes a los años 1979-1982; 2.129.777 millones a la fase Solchaga, 1982-1986, y 650.122 millones a la época Croissier de 1986 a 1988. De estos recursos casi las tres cuartas partes fueron destinados a la siderurgia integral y a la construcción naval. NAVARRO ARANCEGUI (1990): 248-251.

(63) NAVARRO ARANCEGUI (1989): 67.

3. LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1988

El progresivo enfrentamiento de los sindicatos con el gobierno no sólo tuvo lugar por los procesos de reconversión industrial sino también por la aplicación de un tipo de política económica cuyas prioridades consistían en reducir el déficit público, disminuir progresivamente la inflación, contener el incremento de los salarios y aumentar la productividad. Los resultados de esta política sólo afectaron positivamente a la inflación, que bajó seis puntos en tres años, pues el déficit no consiguió reducirse, los salarios perdieron poder adquisitivo y se perdieron medio millón más de puestos de trabajo (64). Da la impresión de que los primeros gobiernos socialistas no se enfrentaron con decisión a reducir las desigualdades y, en algunos aspectos, éstas aumentaron. Por ejemplo, las reformas fiscales no afectaron sino a los aspectos marginales del fraude y la evasión que practicaban masivamente las empresas, mientras que la recaudación de impuestos de los trabajadores manuales y empleados se hizo mucho más eficaz (65). Qué olvidadas quedaban aquellas reflexiones de Carlos Solchaga cuando declaraba a finales de 1981 que «nadie puede esperar que mediante la moderación salarial tan sólo se pueda superar la situación actual. Esto no sólo es económicamente equivocado sino que es socialmente injusto y políticamente intolerable» (66).

La dirección del PSOE estaba convencida de que la UGT no tenía más remedio que apoyar al gobierno, fuera cual fuera su política. La estrecha vinculación entre el partido y el sindicato conducía inevitablemente a que si el gobierno fracasaba, arrastraría en su caída al sindicato y si, por el contrario, lograba mantenerse en el poder, su éxito reforzaría al conjunto de la familia socialista (67). Sin embargo, los dirigentes de la UGT no podían aceptar un planteamiento semejante, que inevitablemente reduciría su influencia sindical, dejando en manos de CC.OO. el trabajo de oposición al gobierno. Por lo tanto, durante los años 1984-86 la UGT tuvo que mantener un difícil equilibrio entre el cada vez mayor distanciamiento con el gobierno y el progresivo acercamiento a CC.OO. (68).

A partir de 1985, comenzó a apreciarse un cambio de actitud mucho más profundo en la UGT, que por primera vez decidió enfrentarse con el gobierno por el desarrollo de su política económica (69) y sumarse a CC.OO. en las

(64) La tasa de paro superó el 20% en 1985, y la población ocupada se situaba en 10,6 millones de trabajadores, dos millones menos que en 1976 y la cifra más baja de nuestra historia reciente. JULIÁ, PRADERA y PRIETO (1996b): 641-642.

(65) GILLESPIE (1991): 433.

(66) CARLOS SOLCHAGA: «La insensibilidad del gobierno», en *El Socialista*, 2-8 de diciembre de 1981.

(67) GUINDAL y SERRANO (1986): 144.

(68) «Una UGT vigilante apoyará al gobierno», declaraciones de NICOLÁS REDONDO a *El Socialista*, 1-7 de junio de 1983.

(69) Declaraciones de NICOLÁS REDONDO a *El Socialista*, 30 de diciembre de 1984.

movilizaciones contra la Ley de Pensiones, que fue aprobada por el Parlamento con los únicos votos del grupo socialista.

El clima de confrontación entre la UGT y el gobierno se hizo público durante un agrio debate televisado entre Nicolás Redondo y Carlos Solchaga, el 19 de febrero de 1987, en el que el dirigente ugetista le espetó al ministro: «tu problema, Carlos, son los trabajadores, te has equivocado de trinchera (...) y tu identificación con la patronal es casi *cohabitación*» (70). Tan duros fueron los intercambios verbales, que la presentadora Victoria Prego tuvo que impedir el debate entre el ministro y el sindicalista. Sin pretender justificar a Nicolás Redondo, la verdad es que la actitud arrogante —como la calificaba Felipe González— del ministro de Economía, que a veces humillaba a su interlocutor, favoreció el enfrentamiento con los sindicatos (71).

A los pocos días de este encuentro televisado se produjo la disolución de la comisión mixta de la UGT y el PSOE, lo que supuso la ruptura formal entre el partido y el sindicato. Nicolás Redondo y Antón Saracibar dimitieron como diputados y acusaron abiertamente al gobierno de hacer una política antisocial de derechas. Por otro lado, algunos miembros del gobierno acusaron a UGT de «*corporativismo, tercermundismo, de utilizar métodos nacional-sindicalistas y mafiosos, y sobre todo de jugar el juego de los comunistas*. El discurso del PSOE de la intimidación se dirigió ahora con toda su fuerza contra los sindicatos: quien los seguía, conducía el país al caos» (72). Qué lejos quedaban aquellas declaraciones de Felipe González en 1983 cuando afirmaba con rotundidad que «necesitamos sindicatos fuertes (...), y no habrá nunca nada que pueda fragilizar la fortaleza de los sindicatos» (73).

Para Alfonso Guerra, esta estrategia de separación no fue buena para nadie, pues «ha obligado al partido —decía— a relacionarse con la misma intensidad con los otros sindicatos y a UGT a no hacer distinciones entre los partidos. En definitiva, indefinición política e ideológica, pérdida de referentes para todos y debilitamiento del proyecto progresista compartido por socialistas y ugetistas» (74). Sin embargo, lo que en realidad sucedió fue que la dirección de UGT, en vez de operar como una facción organizada dentro del PSOE para conseguir sus propósitos, decidió cooperar con su antiguo rival sindical. Su ruptura con el gobierno socialista no implicó por tanto la «despolitización» del sindicato, sino más bien su implicación en la política por otros medios (75), y tras años de enfrentamientos entre las dos grandes centrales sindicales, la recuperación de la unidad de acción se hizo para UGT imprescindible aun a costa de romper con los tradicionales lazos de unión al PSOE.

(70) *El País*, 20-2-1987.

(71) IGLESIAS (2003): 838.

(72) KÖHLER (1995): 325.

(73) *El Socialista*, 4-10 de mayo de 1983, p. 31.

(74) GUERRA (2006): 332.

(75) ASTUDILLO (2004): 94.

Se ha considerado con mucha frecuencia que la unidad entre sindicatos y partidos socialdemócratas ha supuesto una correcta estrategia sindical. Sin embargo, la experiencia del sur de Europa enseña que cuando el movimiento sindical se divide según diferentes preferencias ideológicas, a la larga los líderes sindicales están forzados a cooperar entre ellos, aunque esto suponga renunciar a los tradicionales vínculos con el partido (76). En el caso de España esta separación se produjo con cierta anticipación y mayor claridad que en otros países europeos, y fue la UGT quien tomó la iniciativa, no como en Gran Bretaña, que fue el resultado de una necesidad sentida por el partido laborista para «hacer viable la conformación de un espacio político más amplio que el de la base social de los intereses defendidos por el sindicato» (77).

En una situación de claro crecimiento económico, que se venía produciendo desde 1986, los sindicatos decidieron pasar a la ofensiva y reclamar del gobierno un giro social, consistente en incrementar el empleo, en una justa distribución de las rentas y en mayores prestaciones sociales. «Este giro en la política económica –afirmaba Nicolás Redondo– no es una demanda sindical sino que es una demanda generalizada y completamente sentida por la izquierda sociológica y por el conjunto del país» (78). Significativamente, la protesta popular se va a producir en el contexto de una reactivación económica que, por un lado, permitía elevar las expectativas de la población, pero por otra parte, hacía que ésta constatará que la mejora de la situación económica, tan publicitada por el Presidente del gobierno, su ministro de Economía y los organismos internacionales, no acaba de llegar nunca a las clases trabajadoras (79).

En febrero de 1988, las dos centrales sindicales mayoritarias llegaron a un acuerdo general sobre la necesidad de cambiar la política económica del gobierno y elaboraron una plataforma unitaria para la negociación colectiva de ese año. En los meses siguientes, las relaciones gobierno-sindicatos se fueron deteriorando. La gota que colmó el vaso fue la presentación por parte del gobierno de un proyecto de ley de fomento del empleo juvenil que fue considerado por los sindicatos como una agresión a los trabajadores. UGT, CC.OO. y el resto de las centrales sindicales acordaron la convocatoria de un paro general de 24 horas para el día 14 de diciembre de 1988, con el objetivo de conseguir la inmediata retirada del plan de empleo juvenil y un giro social en la política del gobierno que supusiera un incremento del subsidio de desempleo, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la cobertura social. Estas reivindicaciones eran desde luego bastante moderadas y no presentaban ningún carácter desestabilizador. Además, los sindicatos no quisieron utilizar el término de huelga general, evitando que el paro convocado pudiera ser interpretado como una movilización de tipo político cuyo objetivo fuera la caída del gobierno.

(76) ASTUDILLO (2004): 73.

(77) ESPINA (1991): 223.

(78) *Gaceta Sindical*, nº 60, marzo de 1988, p. 8.

(79) AGUILAR y ROCA (1989): 9.

Sin embargo, para la ejecutiva del PSOE la huelga era claramente política y, cerrando filas con el ejecutivo, decidió pasar a la ofensiva contra los sindicatos, acusándoles de pretender desestabilizar la democracia y deslegitimar al gobierno socialista. Desde La Moncloa se acusaba a los sindicatos de querer derribar al gobierno y hacer una huelga general semejante a la Revolución de Octubre. Nicolás Redondo recuerda que uno de los encontronazos más duros que tuvo con Felipe González fue cuando «le enviaron el mandato de la comisión de disciplina del partido en el que le instaban a que desconvocara de inmediato la huelga general» (80). La verdad es que el gobierno hizo todo lo posible por evitar la huelga y también por intentar desplazar a Redondo de la dirección de UGT. Según recuerda el dirigente ugetista, «en la Moncloa se celebró una reunión en la que estaban Matilde Fernández, Alonso Puerta y otros para desestabilizar UGT» (81). El resultado de todas estas intrigas y de las mutuas descalificaciones condujo a un tipo de debate que recordaba al utilizado durante la campaña del referéndum de la OTAN.

La huelga general parecía a la ejecutiva del PSOE injustificable, perjudicial para los sindicatos, para la economía y la imagen de España y, en fin, para la convivencia democrática. Así es que los dirigentes socialistas procedieron a politizarla más allá incluso de lo que los sindicatos nunca se atrevieron a soñar (82). Pero, «todos los esfuerzos malhumorados y amenazadores del Gobierno y del PSOE –vaticinaba Javier Pradera– para desactivar la huelga, incluidas sus torpes premoniciones sobre desórdenes callejeros, sólo conseguirán fomentarla» (83). Como así fue, pues el 14 de diciembre de 1988 más de 8 millones de trabajadores paralizaron prácticamente todo el país, protagonizando la más importante huelga general vivida en España.

Las centrales sindicales habían sido capaces de movilizar no sólo al conjunto de los trabajadores sino a millones de ciudadanos que secundaron el paro contra el gobierno, más por una actitud de contestación a la prepotencia con que el PSOE venía ocupando el poder desde 1982 que por las reivindicaciones que los sindicatos proponían. Según Rosa Conde, portavoz del Gobierno, «aunque el origen del conflicto respondía a una enemistad personal de Nicolás Redondo con Felipe González (...), no hay que engañarse: la sociedad lo secundó. Y lo secundó, porque había algo (...), porque existía algún malestar con el Gobierno. Y yo creo que lo había» (84).

Otras explicaciones trataban de minimizar este descontento social señalando la incidencia que tuvo en el éxito del 14-D la protesta fiscal de pequeños y

(80) Y por si esto fuera poco, la incomunicación entre Felipe González y el dirigente ugetista era tan profunda que en los pocos encuentros que ambos mantuvieron y que no duraban más de dos minutos «a mí –comenta Redondo– me parecían eternos, mirándonos, los dos solos, y sin hablar». JULIÁ, PRADERA y PRIETO (1996b): 638.

(81) JULIÁ, PRADERA y PRIETO (1996b): 638.

(82) JULIÁ (1989): 137.

(83) *El País*, 27-11-1988.

(84) IGLESIAS (2003): 629.

medianos empresarios, la oportunidad política de la derecha de erosionar al gobierno socialista (85) o el interés de la Patronal en que así fuera –como señalaba Felipe González– (86). Más acertado parece el análisis de Solchaga, cuando explica que:

«La ruptura con los sindicatos fue lo que caracterizó la vida política entre 1987 y 1990-1991 y explica en gran medida la huelga general de diciembre de 1988, los relativamente pocos resultados electorales del PSOE en 1989 después de una legislatura de fuerte expansión económica y la posterior negociación social del 1990. La razón de este protagonismo sindical es doble, en mi opinión –escribe Solchaga–. En primer lugar, la ausencia de una auténtica oposición parlamentaria al Gobierno del PSOE en este tiempo. En segundo lugar, la existencia de mayor auge económico desde comienzos de los años setenta, que permitió una política audaz de los sindicatos, que para llevarla adelante no encontraron más oposición que la del Gobierno» (87).

Aunque en el éxito de la huelga general pesaron más las cuestiones sociales, los efectos políticos fueron indudables. El 14-D fue un duro golpe para el gobierno y muy especialmente para su presidente, que lo interpretó como su primera derrota política. Tanto es así que Felipe González sopesó la posibilidad de dimitir y dejar como sucesor a Narcís Serra. Desde luego, en diciembre de 1988 se produjo el momento de mayor desafección de la población con el gobierno socialista y representó un momento de censura moral, de desconfianza y desapego enorme. Así lo valoraba Alfonso Guerra, pero en vez de asumir la parte de responsabilidad que sin duda él también tenía, trató de culpar a los responsables de la política económica.

«Las actitudes de altos cargos –decía Guerra–, las declaraciones jactanciosas, una cierta arrogancia que transmitía desprecio a la opinión pública, la aparición de figuras económicas representativas de negocios rápidos, algunas frases odiosas, como “en España es donde los inversores ganan más dinero en menos tiempo”, crearon un ambiente hostil hacia el Gobierno que precipitaron una crisis de fiabilidad» (88).

Mientras que Solchaga se enorgullecía de la política financiera que propiciaba el rápido enriquecimiento de unos pocos, pedía al mismo tiempo a los empresarios que rechazaran aumentos salariales superiores al 5%, cuando la tasa de inflación era entonces del 6,5% (89).

Durante el mandato de Boyer y Solchaga, que –según Felipe González– garantizaban la continuidad económica, Alfonso Guerra llegó a manejar aquella frase lapidaria: «Esto es un gobierno de coalición entre el PSOE y el ministro

(85) PARAMIO (1992): 535.

(86) IGLESIAS (2003): 832.

(87) SOLCHAGA (1997): 144.

(88) GUERRA (2006): 326.

(89) KÖHLER (1995): 312.

de Economía» (90). La verdad es que para Felipe González los ministros de Economía fueron siempre intocables. Cuando en julio de 1984 –según relata Morán– Miguel Boyer, apoyado en grupos económicos importantes, intentó forzar una crisis de Gobierno para separar a determinados ministros y remodelar un Gabinete de hombres de confianza extraídos de su cantera, la influencia sobre el Presidente era tal que «éste tomó en consideración la necesidad de la crisis e incluso consultó sobre cómo parecería a la opinión pública un reajuste en aquel momento (...). El apoyo del Presidente –continúa Morán– a Boyer era total. Total, manifiesto, sin demasiados matices; admirativo. Había una relación muy fuerte y una mutua dependencia que Boyer sentía cada vez menos» (91).

4. EL GIRO SOCIAL

Tras el éxito de la huelga general del 14-D, Felipe González, en vez de mantener el pulso con los sindicatos y recurrir a la convocatoria de elecciones generales para recuperar en las urnas el apoyo perdido, decidió plegarse a las demandas que clamaban por un giro social de la política económica e inició una serie de negociaciones con los sindicatos en las que se discutió fundamentalmente el incremento del gasto social y la ampliación de las prestaciones sociales a las clases menos favorecidas. Pero esta negociación no fue nada fácil, entre otras cosas, por la profunda desconfianza entre sindicatos y gobierno, y por la resistencia del ministro de Economía a favorecer la negociación (92). En la primera reunión de los sindicatos con el Presidente del Gobierno, celebrada el 22 de diciembre de 1988, no sólo no hubo acuerdo sino que además se puso en evidencia la descoordinación entre Solchaga y Felipe González. Alfonso Guerra recuerda que:

«Antes de acudir a la reunión Felipe González le había preguntado al ministro de Economía cuál era el margen económico para la negociación y hasta dónde podía ofrecer a los sindicatos. El ministro le suministró la cifra máxima de 180.000 millones de pesetas. Cuando en la reunión con los sindicatos el presidente ofreció esta cifra, Nicolás Redondo le humilló, mofándose de él, dado que en relaciones de segundo nivel del sindicato con el Ministerio de Economía se le habían ofrecido 350.000 millones» (93).

(90) IGLESIAS (2003): 833.

(91) MORÁN (1990): 351. Ludolfo Paramio también señala la amistad personal de Felipe González y Boyer, así como «la forma excesivamente personal de Boyer al dirigir la política económica de ajuste y austeridad, forzosamente difícil e impopular», *El Socialista*, 15 de julio de 1985.

(92) «El ministro de Economía, Carlos Solchaga, –según Felipe González– no se cansó de repetir que no había manera de hacer aquellas concesiones, y es verdad que, después de la huelga, se hicieron». IGLESIAS (2003): 833.

(93) GUERRA (2006): 330.

Este aumento del gasto social significaba de hecho la aplicación de una política de reparto, reconociendo que era el momento de que el esfuerzo que los trabajadores habían realizado en los años de ajuste duro sirviera para ampliar y consolidar el Estado del Bienestar. Ya habían terminado los años de recesión y crisis económica, y desde 1986 había comenzado un proceso de recuperación sostenida que duraría hasta 1991 (94).

Como resultado de las negociaciones y acuerdos parlamentarios que tuvieron lugar desde comienzos de 1989, el gobierno dispuso una serie de decretos y leyes, entre las que se encontraban: 1) la revalorización de las pensiones, 2) el aumento de la cobertura del seguro de desempleo y la ampliación de la protección a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años y 3) la ley de pensiones no contributivas. Esto suponía un paso importante en la consolidación del modelo de protección social hacia quienes había afectado más la crisis, es decir, los parados y las personas mayores, y en la extensión de la cobertura sanitaria al 99% de la población (95).

La puesta en vigor de toda esta legislación provocó un extraordinario aumento del gasto público de carácter social, produciéndose fuertes incrementos en las prestaciones por desempleo, en las pensiones de la Seguridad Social y en los gastos sanitarios de la Seguridad Social. Hay que señalar, que este aumento ya se venía produciendo desde la puesta en vigor de la Ley General de Sanidad de abril de 1986, que preveía la extensión de la asistencia sanitaria al conjunto de la población y la creación de un Sistema Nacional de la Salud, cuya puesta en práctica supuso una importante reestructuración y mejora de la sanidad.

Otro de los grandes apartados del gasto social fue el referido a la Educación. La puesta en marcha, primero de la LRU (1983), después de la LODE (1985) y finalmente de la LOGSE (1990) trajo consigo un importante crecimiento de las inversiones en materia educativa, sobre todo entre los años 1988 y 1992.

También durante estos años (1988 a 1992) se produjeron incrementos sustanciales en otros gastos sociales, como los dedicados a viviendas, urbanismo, cultura, medio ambiente, promoción social, etc., y sobre todo un espectacular desarrollo de las inversiones públicas, dirigidas a mejorar las precarias infraestructuras del país (96).

5. EL DECLIVE SOCIALISTA

El resultado de las elecciones de 1989 sirvió para despejar la incógnita de hasta qué punto las movilizaciones sociales que culminaron el 14-D tendrían una repercusión electoral y política trascendente. Desde luego, estas elecciones

(94) GILLESPIE (1998): 110.

(95) FERNÁNDEZ, MATILDE (1992): 248.

(96) SÁENZ DE COSCULLUELA (1992): 294-295.

no cambiaron sustancialmente el mapa electoral y el PSOE seguía manteniendo una situación predominante. Sin embargo, comenzaba a perder por su izquierda una parte de su base social tradicional que en el futuro le sería muy difícil recuperar (97).

A partir de 1990 comenzaron a conocerse nuevos escándalos y casos de corrupción que afectaron a distintos partidos y muy especialmente al PSOE, donde se agudizarían las tensiones internas, y guerristas y renovadores se enzarzarían en un combate inacabable (98). El caso Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, fue el detonante de esta lucha abierta, entre otras cosas porque tanto Felipe González como la dirección del partido no supieron reaccionar a tiempo. Según Rosa Conde, el presidente del Gobierno «tardó en tomar decisiones; el propio Alfonso Guerra tardó demasiado en ser consciente de lo que estaba ocurriendo. Y perdimos un tiempo vital, estuvimos desorientados, sin ofrecer respuestas, cuando al otro lado teníamos, no a unos adversarios políticos, sino a unos enemigos que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de acabar con nosotros» (99).

Las poco claras explicaciones que Alfonso Guerra dio en el parlamento, así como la férrea defensa que de él hizo el presidente del gobierno, hicieron que el caso «Juan Guerra» ocupara sistemáticamente las páginas de la prensa, deteriorando gravemente la imagen del vicepresidente y afectando al conjunto del gobierno. Alfonso Guerra recuerda que aquello fue una burda operación política contra él urdida desde la derecha y desde las filas de su propio partido, que terminó sin que hubiera ni una sola sentencia condenatoria sobre los asuntos denunciados e investigados por el juez.

«Fue todo –dice Guerra– una concatenación de hechos: el despecho de una esposa abandonada, la cooperación maliciosa de algunos dirigentes políticos, el ensañamiento de la prensa contra mí, la creencia de que había llegado el momento de suplantarme en la dirección del partido por parte de algunos dirigentes socialistas (...) los adversarios políticos de mi propio partido creyeron oír el cuerno que anunciaba la batalla final contra aquel a quien no podían vencer en el terreno político, pero tal vez destruir mediante el ominoso calvario de la mendacidad difundida en el espacio global» (100).

El 12 de enero de 1991, pocos días antes de que Juan Guerra fuera inculpado por delito fiscal, dimitió su hermano Alfonso, abriendo una crisis gubernamental

(97) Los cerca de 800.000 votos perdidos por el PSOE en las elecciones de 1989 fueron a parar a Izquierda Unida, que pasó de 7 a 17 escaños y del 4,6% de los votos en 1986 a 9,05% en 1989.

(98) Ya desde comienzos de 1984 comenzaron a detectarse los primeros síntomas de corrupción en las filas socialistas. En este sentido, Carmen García Bloise reconocía que el PSOE «había asumido la gobernación del Estado con gente que, en muchas ocasiones, no era siquiera proclive a la democracia», *El Socialista*, 28 de marzo al 3 de abril de 1984, p. 23.

(99) IGLESIAS (2003): 635.

(100) GUERRA (2006): 346-347.

que no se cerraría hasta marzo de 1991, cuando Felipe González formó un nuevo gabinete en el que Narcís Serra era nombrado vicepresidente. Con ello se terminaba el tándem González-Guerra y comenzaba una nueva etapa en la que el nuevo vicepresidente Narcís Serra ya no iba a garantizar la estrecha conexión entre el partido y el gobierno que había funcionado durante más de ocho años. Narcís Serra ni contaba con suficientes apoyos en el PSOE como para facilitar una fluida relación con el gobierno, ni era bien visto por un gran número de dirigentes socialistas, mayoritariamente fieles a Alfonso Guerra, que seguía siendo vicesecretario del PSOE y continuaba manteniendo un importante control del partido. Por si esto fuera poco, Solchaga mantenía una batalla personal con Serra, por el que no tenía la menor simpatía. «No sólo se negaba a tratarle como se debe tratar a un vicepresidente, sino que se negaba a despachar con él cuestiones de su ministerio. Además, Serra no era el vicepresidente brillante que González necesitaba desesperadamente para suplir la ausencia de Guerra» (101).

La verdad es que la relación entre Felipe y Alfonso había sido perfecta, aunque nunca fueron amigos, sino que compartían un proyecto común y no dudaban ninguno de los dos en ayudar al otro para llevarlo adelante (102). Sin la fidelidad entre ambos no se entiende la defensa que hizo Felipe González de Guerra al estallar el escándalo de su hermano, como tampoco se comprende la importante colaboración del vicepresidente del Gobierno a la campaña del referéndum de la OTAN, a pesar de que detestaba la idea de permanecer en la Alianza, y cuando el gobierno tuvo problemas con los sindicatos, y tras intentar situarse en un plano central entre el debate entre UGT y el gobierno, optó por acusar al sindicato socialista de haber caído en manos de los «comunistas» a la vez que fomentaba el «frente sindical» del PSOE, con el fin de destruir la dirección de UGT (103).

La dimisión de Guerra agudizó además el enfrentamiento entre guerristas y renovadores que ya se había puesto de manifiesto durante la celebración del XXII Congreso del PSOE en noviembre de 1990. Este congreso supuso una clara victoria del sector del partido controlado por Guerra y el gran perdedor fue el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, a quien Guerra responsabilizaba de ejercer una política económica excesivamente liberal. La realidad es que las disputas entre guerristas y renovadores no respondían a un conflicto entre distintas posiciones políticas. Entre ambos sectores no existían diferencias ideológicas importantes, «sólo se debatían –como reconocía Joaquín Almunia– espacios de poder, espacios de influencia, lealtades personales, castigos a los desleales y premios a los leales» (104). Lo que existía era un enfrentamiento larvado que se manifestaba incluso en el seno del Gobierno. Jorge Semprún, nombrado ministro de Cultura en 1988, y no identificado con ninguna de las

(101) CERNUDA (1994): 310.

(102) CERNUDA (1994): 245.

(103) SOTO (2005): 203.

(104) BURNS (1996): 332.

corrientes del PSOE, describe con profundo sarcasmo cómo se desarrollaban las reuniones del Consejo de Ministros y qué impresión le producían algunos ministros, y sobre todo el poderoso vicepresidente, Alfonso Guerra, al que calificaba de «populista de izquierdas» y «que daba una imagen llena de suficiencia, de megalomanía, de intelectualismo kistch, de donjuanismo andaluz de la más vulgar especie (¡aquellas páginas consagradas a describir sus noches dedicadas a hacer el amor y a escuchar a Mahler!)» (105). No le merecía mejor opinión su antiguo amigo y camarada comunista, Enrique Múgica, alineado coyunturalmente con el guerrismo:

«El hombre que había vuelto a encontrarme en el gobierno en 1988 –decía Semprún refiriéndose al ministro de Justicia, Enrique Múgica,– había cambiado mucho. El bon vivant se había convertido en vividor. El militante se había convertido en hombre de aparato. Su antiguo valor había sido sustituido por una pusilanimidad llena de cautela y febrilidad. Su sentido de la apertura y del consenso había degenerado en puro oportunismo, a veces inoportuno por añadidura. Próximo en un principio, por formación y sensibilidad, a la corriente socialdemócrata del PSOE, Múgica había terminado por fundirse en el molde del aparato guerrista, en el cual un discurso populista de izquierdas permitía adornar y ocultar una práctica autoritaria y clientelar, desprovista de principios estratégicos y éticos, pero suministradora de puestos y prebendas» (106).

El año 1992, que fue el año de las grandes celebraciones que pusieron a España de moda en el Mundo, fue además un año terrible –como lo calificó Solchaga– (107) para la economía española que fue seguido por tres años de profunda recesión que «deshicieron toda la ganancia adquirida durante la anterior época de auge y llevaron al paro a una tasa incluso superior a la de 1985 (24,17% en 1994)» (108).

También fue un año muy complicado desde el punto de vista político, pues el descubrimiento de continuos casos de corrupción ocasionaron una creciente pérdida de credibilidad en el gobierno y en su presidente. Pero, contra todo pronóstico, el PSOE volvió a ganar las elecciones de junio de 1993 aunque sin conseguir la mayoría absoluta.

Felipe González reconoció que, pese a la victoria, el partido socialista había sido castigado por los electores. Sin embargo, él «había entendido el mensaje de los ciudadanos: quieren el cambio del cambio». Una frase feliz cuyo contenido se limitaba a algo tan impreciso como el «impulso democrático», que los socialistas habían incluido en su programa electoral y que no era más que una declaración de principios en favor del saneamiento de la vida política y a la lucha contra la corrupción. La verdad es que ante la evidencia de la corrupción

(105) SEMPRÚN (1993): 56.

(106) SEMPRÚN (1993): 62-63.

(107) BURNS (1996): 164.

(108) SOLCHAGA (1997): 167.

la reacción inicial del PSOE fue negarlo todo, defenderse, no dar explicaciones, y cuando en 1993 Felipe González parece inclinado a regenerar la vida política, da la impresión de que esto no era más que un deseo personal que no se traducía en una labor conjunta con el partido. «En el grupo parlamentario socialista –según cuenta Victoria Camps– no se discutía nunca nada; ninguno de los temas de corrupción se discutieron en el grupo. Ni había *impulso ético*, ni había *un cambio del cambio*» (109).

Hay que reconocer que el gobierno formado por Felipe González en julio de 1993, en el que incluyó a un importante grupo de independientes, fue un gabinete de buenos gestores. Quizás uno de los mejores gobiernos de la época socialista a pesar de que tuvo que gobernar en una situación terriblemente desfavorable, pues le tocó cargar con la responsabilidad de los numerosos casos de corrupción que provenían de legislaturas anteriores.

Pero no fueron sólo políticos o altos cargos socialistas los que estaban implicados en tramas ilegales, la corrupción alcanzaba a conocidos líderes empresariales, como Mario Conde o Javier de la Rosa, que se habían hecho famosos a finales de los años 80 a través de espectaculares operaciones financieras que terminaron en auténticas estafas por valor de muchos miles de millones de pesetas. Lleva razón Julio Aróstegui cuando señala que «el problema en el mundo de la política era reflejo de la existencia habitual de ciertas prácticas extendidas de corrupción y amoralidad en el mundo de los negocios (...) el uso de información privilegiada, la exportación ilegal de capitales o la ocultación de fondos obtenidos ilegalmente (dinero negro)» (110). Otro de los asuntos que estallaron a mediados de 1994 y que tuvo una especial incidencia en el desprestigio socialista fue la reapertura de los sumarios contra los GAL, que supuso el procesamiento de altos cargos del Ministerio del Interior, incluido su máximo responsable, José Barrionuevo.

Esta última legislatura socialista fue un auténtico calvario para el gobierno y especialmente para Felipe González, que reconoció «haberlo pasado muy mal durante ese periodo» (111). Desde mediados de 1993 se produjo una profunda crispación de la vida política, alimentada por los casos de corrupción, que fueron utilizados por el PP y la mayoría de los medios de comunicación para llevar a cabo una política de acoso permanente al gobierno. En palabras de Ramón Cotarelo:

«Era una situación que rayaba en el frenesí colectivo, animado por alguno de los comentaristas más inmorales y más crispados. Se llegó al extremo de que salir en público defendiendo al Gobierno sólo se entendía como un acto de locura o de excentricidad. Incluso personas que habían estado vinculadas al partido en el poder durante años, ocupando puestos de responsabilidad, o que habían vivido opípara-

(109) BURNS (1996): 437-449.

(110) ARÓSTEGUI (1999): 358.

(111) PREGO (2000): 289.

mente en cargos de libre designación (...) hicieron mutis por el foro y abandonaron a su gobierno a merced de una operación de linchamiento» (112).

Por otra parte, todos los procesos electorales que tuvieron lugar desde 1993, supusieron un importante retroceso del PSOE y al mismo tiempo un significativo avance para el PP. Además, el gobierno, que estaba en minoría parlamentaria, dependía de los votos de CiU. Así es que cuando Pujol, a finales de 1995, decidió retirar su apoyo parlamentario al gobierno socialista, Felipe González no tuvo más remedio que anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas para marzo de 1996.

El resultado de las elecciones confirmó la victoria del Partido Popular aunque por un margen mucho más estrecho del previsto. La gran sorpresa fue que a pesar del fuerte desgaste del gobierno sufrido en la última legislatura, el PSOE se quedó a poco menos de 300.000 votos del PP. En realidad, en estas elecciones no se había modificado sustancialmente la tendencia ideológica del voto, lo que sí había variado, a causa del sistema electoral, era la composición del Parlamento (113).

Da la impresión de que los casos de corrupción, aunque tuvieron su efecto en la derrota socialista, no fueron el factor determinante. Parece más bien que la derrota de 1996 fue el resultado de un largo proceso de declive del PSOE, que poco a poco fue perdiendo una parte importante de su electorado, reduciendo su influencia entre los jóvenes y en las zonas urbanas, y por lo tanto, su base electoral se fue erosionando con el transcurso del tiempo (114). Desde las triples elecciones de 1987 (europeas, autonómicas y municipales) las clases medias comenzaron a dar la espalda al PSOE (115), y si a esto sumamos que en diciembre del año siguiente la clase trabajadora se enfrentó con el Gobierno en la huelga general del 14D y que las relaciones con los sindicatos durante la última legislatura socialista no fueron especialmente buenas, parece lógico que una parte del electorado socialista abandonara al PSOE y se dirigiera a la abstención o a Izquierda Unida, que obtuvo el 10,54% de los votos y 21 diputados, uno de sus mejores resultados electorales desde su constitución.

6. BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, SALVADOR y ROCA, JORDI (1989): *14-D: economía política de una huelga*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill.

(112) COTARELO (1995): 235.

(113) La izquierda seguía siendo mayoritaria en número de votos y en porcentaje electoral (el PSOE e IU superaban los 12 millones de votos y el 48% de los votantes), mientras que el centro-derecha –PP y CIU– con 10.800.000 votos se quedaban en el 42%, aunque lograban la mayoría parlamentaria.

(114) ASTUDILLO (2004): 83.

(115) TEZANOS (1994): 20.

- ALBENTOSA, LUIS (1985): «La política de ajuste aplazada: reconversión industrial», *Información Comercial Española (ICE)*, nº 617-618.
- ARÓSTEGUI, JULIO (1999): «La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)», en MARTÍNEZ, JESÚS (coord.): *Historia de España. Siglo XX. 1939-1996*, Madrid, Cátedra.
- ASTUDILLO RUIZ, JAVIER (2004): «La trampa partidista de la UGT: de la relación solidaria con el PSOE a la unidad de acción sindical con CC.OO.», *Revista Española de Ciencia Política*, nº 11, pp. 73-101.
- BURNS MARAÑÓN, TOMS (1996): *Conversaciones sobre el socialismo*, Madrid, Plaza y Janés.
- CERNUDA, PILAR (1994): *El Presidente*, Madrid, Temas de Hoy.
- COTARELO, RAMÓN (1995): *La conspiración. El golpe de estado difuso*, Barcelona, Ediciones B.
- DEL VAL CID, CONSUELO (1996): *Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la OTAN*, Madrid, Siglo XXI.
- ESPINA, ÁLVARO (1991): «Los sindicatos y la democracia española: La huelga general de diciembre de 1988 y sus implicaciones políticas», en ESPINA, ÁLVARO (comp.): *Concertación social, neocorporatismo y democracia*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- FERNÁNDEZ, MATILDE (1992): «Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.
- FERNÁNDEZ-BRASO, MIGUEL (1983): *Conversaciones con Alfonso Guerra*, Barcelona, Planeta.
- FERNÁNDEZ-MARUGÁN, FRANCISCO (1992): «La década de los ochenta: impulso y reforma económica», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.
- GILLESPIE, RICHARD (1991): *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza.
- GONZÁLEZ TEMPRANO, ANTONIO (dir.) (1998): *La política del gasto social (1984-1996). En la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas*, Madrid, CES.
- GUERRA, ALFONSO (2006): *Dejando atrás los vientos. Memorias 1982-1991*, Madrid, Espasa Calpe.
- GUINDAL, MARIANO y SERRANO, RODOLFO (1986): *Nicolás Redondo: el sindicalismo socialista*, Madrid, UGT.
- IGLESIAS, MARÍA ANTONIA (2003): *La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno*, Madrid, Santillana.
- JULIÁ, SANTOS (ed.) (1989): *La desavenencia. Partido, sindicatos y huelga general*, Madrid, El País/Aguilar.
- (1996a): *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1996.
- (1996b): «Ruptura de familia», en JULIÁ, SANTOS; PRADERA, JAVIER y PRIETO, JOAQUÍN: *Memoria de la Transición*, Madrid, Taurus.

- KÖHLER, HOLM-DETLEV (1995): *El movimiento sindical en España*, Madrid, Fundamentos.
- LINZ, JUAN J. y MONTERO, JOSÉ R. (eds.) (1986): *Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
- MARÍN ARCE, JOSÉ MARÍA, MOLINERO, CARMÉ e YSÁS, PERE (2001): *Historia Política de España. 1939-2000*, Madrid, Itsmo.
- MARÍN ARCE, JOSÉ MARÍA (2006): «La fase dura de la reconversión industrial», *Historia del Presente*, n° 8, pp. 61-101.
- (2007): *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición*, Madrid, CES.
- MONTERO, JOSÉ RAMÓN (1987): «Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular. 1976-1986», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, n° 39, pp. 7-43.
- MORÁN, FERNANDO (1990): *España en su sitio*, Barcelona, Plaza y Janés.
- (2002): *Palimpsesto. A modo de memorias*, Madrid, Espasa Calpe.
- NAJAVAS ZUBELDIA, CARLOS (2007): «La larga transición militar», en QUIROSA-CHEYROUZE, RAFAEL (coord.): *Historia de la Transición en España. Los inicios de proceso modernizador*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- NAVARRO ARANCEGUI, MIQUEL (1989): «La política de reconversión industrial en España», *Información Comercial Española (ICE)*, n° 665.
- (1990): *Política de reconversión: balance crítico*, Madrid, Eudema.
- PARAMIO, LUDOLFO (1992): «Los sindicatos y la política en España. 1982-1992», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.
- PREGO, VICTORIA (2000): *Presidentes. Veinticinco años de historia narrada por los cuatro jefes de Gobierno de la democracia*. Barcelona, Plaza y Janés.
- SÁENZ DE COSCULLUELA, JAVIER (1992): «Las obras públicas. Las infraestructuras», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.
- SARTORI, GIOVANNI (1980): *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, Volumen I, Madrid, Alianza.
- SEMPRÚN, JORGE (1993): *Federico Sánchez se despide de ustedes*, Barcelona, Tusquets.
- SOLCHAGA, CARLOS (1997): *El final de la edad dorada*, Madrid, Taurus.
- SOTO, ÁLVARO (2005): *Transición y cambio en España. 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial.
- TERMES, RAFAEL (1994): «Los últimos doce años del sistema bancario español», en AA.VV: *Historias de una década. Sistema financiero y economía española 1984-1994*, Madrid, AB Asesores.
- TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (1992): «El papel político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.
- (1994): «Socialismo y clases medias», *Sistema* n° 123: 5-37.

- TORTELLA, GABRIEL (1996): «La transición bancaria», en JULIÁ, SANTOS; PRADERA, JAVIER y PRIETO, JOAQUÍN: *Memoria de la Transición*, Madrid, Taurus.
- TUSELL, JAVIER (coord.) (2003): *La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I*. Volumen XLII de la *Historia de España de Menéndez Pidal*, Madrid, Espasa Calpe.
- VALDELVIRA GONZÁLEZ, GREGORIO (1998): «Las ondas largas de la política en el siglo XX», en *Espacio, Tiempo y Forma*, nº 11, Madrid, UNED.
- VELASCO, LUIS DE (1996): *Políticas del PSOE 1982-1995. Del «cambio a la decepción»*, Barcelona, Icaria.
- YÁNEZ-BARNUEVO, JUAN ANTONIO y VIÑAS, ÁNGEL: «Diez años de política exterior del gobierno socialista. 1982-1992», en GUERRA, ALFONSO y TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (eds.): *La década del cambio. Diez años de gobierno socialista 1982-1992*, Madrid, Sistema.